

Imprimir

La reciente polémica desatada en torno a la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pone en evidencia las profundas diferencias en la implementación de la reforma agraria en Colombia. Gerardo Vega, responde a los señalamientos de la Contraloría y expone un contraste evidente entre dos modelos de gestión. Mientras la administración de Vega enfatizó en la eficiencia tecnológica y la rapidez en la adjudicación de tierras, la actual dirección encabezada por Felipe Harman parece haber optado por una vuelta a metodologías más tradicionales, con un impacto negativo en costos y tiempos.

Durante los 15 meses de gestión de Vega, se formalizaron 1.742.786 hectáreas y se adquirieron 270.000 hectáreas a través de compra, recuperación de baldíos y donaciones, con un presupuesto de \$1.2 billones. Además, se establecieron seis zonas de reserva campesina con un total de 411.768 hectáreas. En contraste, la administración de Harman ha adquirido 224.900 hectáreas, formalizado 518.972 hectáreas y constituido zonas de reserva campesina por 226.013 hectáreas, pero con un gasto de 3 billones de pesos. Es decir, con más del doble del presupuesto, los resultados son significativamente menores.

El argumento de Vega es claro: la ANT, bajo su dirección, apostó por el uso de herramientas tecnológicas como imágenes satelitales, drones y fotografía aérea para identificar los predios adecuados, garantizando así procesos más eficientes y menos susceptibles a corrupción. Sin embargo, la actual administración ha optado por incrementar la contratación de personal y aumentar las visitas físicas a los predios, lo que ha resultado en sobrecostos y demoras que van en contravía del objetivo de la reforma agraria.

Por otro lado, en relación a las observaciones de la Contraloría. Respecto a los señalamientos sobre la adquisición de suelos inadecuados, Vega enfatiza en que la presencia de cuerpos de agua no es un impedimento para la producción agropecuaria, sino una ventaja. De hecho, los campesinos beneficiarios de predios como Los Cachorros han reportado cultivos en marcha, desmintiendo la idea de que la tierra no sea apta para la producción.

La crítica más fuerte se dirige a la actual dirección de la ANT por la demora en la entrega de predios. De acuerdo con un informe de septiembre de 2024, de las 321.000 hectáreas

ingresadas al Fondo de Tierras, solo se han entregado 29.958 hectáreas a los campesinos, un retraso que genera incertidumbre y pone en entredicho el compromiso con la reforma agraria.

Más allá de los datos y las cifras, este debate evidencia una pugna ideológica sobre la mejor manera de llevar a cabo la redistribución de tierras en Colombia. Mientras Vega defiende un modelo basado en la optimización de recursos y la modernización de procesos, Harman parece inclinarse por una visión más burocrática, que ha resultado ser menos eficiente. El problema no es solo de gestión, sino de visión política: ¿cómo garantizar una reforma agraria efectiva, que no solo sea rápida, sino que realmente cumpla con su propósito de beneficiar a los campesinos sin generar sobrecostos innecesarios?

Gerardo Vega: 2.012.786 hectáreas

Felipe Harman: 520.096 hectáreas

Foto tomada de: Agronet